

Tras exigencias de la derecha populista:

Debate en Reino Unido por informar etnia de sospechosos de crímenes

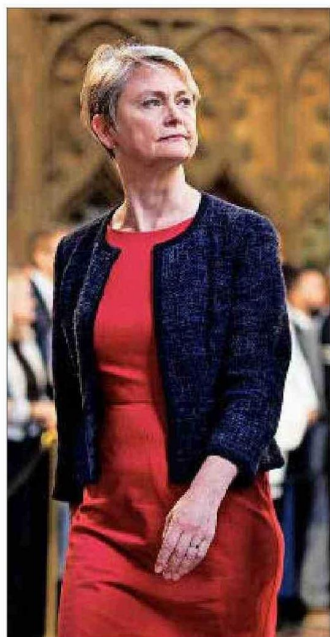
El gobierno de Starmer apuntó a nuevas normas para permitir que la policía dé a conocer también la nacionalidad y situación migratoria de personas acusadas.

J. T. T. L.

En momentos en que busca mostrarse como un gobierno de mano dura contra la migración irregular, el Ejecutivo británico liderado por Keir Starmer abrió una controversia al mostrarse favorable a que la policía revele la etnia y situación migratoria de sospechosos de cometer crímenes. La idea, surgida desde el partido de derecha populista Reform UK, generó críticas de activistas por los migrantes y contra el racismo.

La ministra del Interior, Yvette Cooper, fue la encargada de informar la semana pasada que se están revisando las guías de acción en lo que respecta a la información que la policía puede compartir con la prensa sobre sospechosos. En una entrevista con la BBC, Cooper afirmó que "debe haber más transparencia. Hay que proveer (a la ciudadanía) de más información, incluidos aspectos como la nacionalidad o si (un sospechoso) ha solicitado asilo".

La ministra respondió así a las exigencias del líder de Reform UK (ex Partido del Brexit), Nigel Farage, quien acusó a la policía de "encubrir" a dos sospechosos de haber violado a una menor de 12 años en julio en el condado de Warwickshire (centro de Inglaterra) al no dar a conocer la etnia ni el estatus migratorio de am-



LA MINISTRA del Interior británica, Yvette Cooper.

bos. Farage demandó que fuesen las autoridades las que diesen esa información, luego de que medios locales aseguraran que se trataba de dos hombres de origen afgano y solicitantes de asilo.

A las demandas de Farage, quien suele vincular la migración irregular con el aumento del crimen, respondió también Starmer, quien señaló que "nuestra posición es que todas las autoridades, desde la policía

hasta el gobierno central, deben ser lo más transparentes posible al tratar estos casos".

Desde la Policía de Warwickshire, sin embargo, aseguraron que se guiaron por las directrices nacionales para la policía, que obligan a las autoridades a proporcionar únicamente la edad y el género de los sospechosos de cometer crímenes.

Temor tras protestas

Medios locales señalaron que una de las razones del apoyo del gobierno al cambio de estas directrices se debe al temor de que se repita una situación como la de las violentas protestas en Southport, al noroeste del país, en agosto del año pasado. A raíz de un apuñalamiento masivo que terminó con tres niños muertos, extremistas salieron a la calle a manifestarse contra la comunidad musulmana, luego de que en redes sociales se indicara a un inmigrante musulmán como el sospechoso.

Tras varios días de violencia, un juez reveló que el sospechoso era un ciudadano británico hijo de refugiados ruandeses, quien padecía problemas de salud mental.

Pero la prensa británica apuntó a que el gobierno de Starmer volvió a ceder ante las exigencias de Farage en lo relativo al tema migratorio, debido al alza en las encuestas de Reform UK, que li-

dera la intención de voto con un 31% de las preferencias, mientras el laborismo no logra revertir su caída de popularidad y se sitúa segundo, con un 21%.

Starmer quiere frenar el flujo de votos hacia la derecha populista con promesas como terminar con la política de "fronteras abiertas" a la migración, mayores restricciones a la emisión de visados y de concesión de la ciudadanía para "invertir en nuestra propia gente", y acuerdos con países como Alemania y Francia para facilitar deportaciones y detener los flujos migratorios.

Críticas de organizaciones

Aunque el gobierno defiende que el revelar la nacionalidad o estatus migratorio de sospechosos es una forma de dar más transparencia en casos criminales, la ONG contra el racismo Runnymede Trust criticó la idea, al señalar el pasado fin de semana que tal medida haría que la violencia contra mujeres y niñas sea vista como un tema de etnicidad en lugar de misoginia.

El Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes (JCWI, por sus siglas en inglés) aseguró, en tanto, que tal medida "socavaría" la justicia, al envalentonar "retóricas racistas" en casos criminales con personas no británicas involucradas.